



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: ORDINARIO LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL (CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA).

DEMANDANTE: CIELO AIDA TAMARA HOYOS.

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2016-00543-01.

INFORME SECRETARIAL, Señor Juez, a su despacho el presente proceso, informándole que frente al auto del 9 de noviembre de 2022, notificado en estado del 11 de noviembre de 2.022, que libró mandamiento de pago contra la demandada y decretó el embargo de los dineros que posea en los Bancos de Occidente y Bancolombia, la entidad demandada que fue notificada conforme al artículo 41 del CPTSS y la Ley 2213 de 2.022 con ocasión al correo electrónico del 22 de noviembre de 2.022, contestó a través de apoderado junto con su respectivo poder, la demanda ejecutiva de cumplimiento de sentencia el día 28 de noviembre de 2.022, proponiendo la falta de exigibilidad del título ejecutivo e inembargabilidad de las cuentas de la entidad, ante lo cual le informó que la parte actora solicitó el 31 de enero de 2.023 pronunciamiento sobre las excepciones propuestas. Por último, es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2.023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023, e igualmente, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, está en labores de organización para el trámite de los procesos y depuración de archivos con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este pendiente por tramitar, labores dentro de las cuales se identificó este proceso. Sírvase a proveer.

Barranquilla, 6 de julio de 2023.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO
Secretaria

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.
Barranquilla, seis (6) de julio de veintitrés (2023).

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, se observa que en efecto el mandamiento de pago proferido en este proceso es de fecha 9 de noviembre de 2022, notificado al demandante mediante estado del 11 de noviembre de 2022, y a la entidad demandada notificado conforme al artículo 41 del CPTSS y la Ley 2213 de 2.022 con ocasión al correo electrónico del 22 de noviembre de 2.022, siendo contestado por esta entidad el 28 de noviembre de 2022, lo cual implica que dicha contestación es oportuna por encontrarse dentro del término legal, y por tanto, así se tendrá por sentado en la parte resolutive de esta providencia.

Precisado lo anterior, se vislumbra que la demandada al contestar la demanda ejecutiva, invocó el anterior artículo 336 del C.P.C, el cual según lo indica, señalaba:

“ARTÍCULO 336. EJECUCION CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. “La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o un municipio, la respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse el término establecido en dicho artículo 335”.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“El término de seis meses que establece el inciso anterior, se contará desde la ejecutoria de la sentencia o de la providencia que la complemente; pero cuando se hubiere apelado de aquélla o de ésta, comenzará a correr desde la ejecutoria del auto de obediencia a lo resuelto por el superior”.

Frente a lo anterior, es de advertir que como este asunto trata del cumplimiento de una sentencia, se ha de tener en cuenta el artículo 442 del CGP, aplicable por integración normativa en materia laboral (Art.145 CPTSS), que, sobre la formulación de excepciones alegadas contra el mandamiento de pago, dispone:

“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y **los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.** De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”. - *Negrilla y subraya fuera de texto-*

En este caso, analizada la contestación se extrae que fue propuesta como excepción contra el mandamiento de pago la de inexigibilidad de la obligación por no haber transcurrido los 10 meses de que trata más bien el actual artículo 307 del CGP, aplicable también por integración normativa en esta especialidad (Art.145 CPTSS), que dispone que: “Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada a pago de una suma de dinero podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración”, la cual no está enlistada expresamente dentro de aquellas enunciadas en el numeral 2º que se pueden proponer contra el mandamiento de pago cuando se trate de una obligación contenida en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, por lo que resultaría improcedente la excepción formulada.

Ahora bien, si en gracia de discusión habría lugar a estudiar y tramitar la falta de exigibilidad del título alegada por no haber transcurrido los 10 meses de que trata el artículo 307 de la ley 100 de 1993, es de recordar que este Juzgado cuando libró el mandamiento de pago en mención, consideró:

“Reunidos como se encuentran los requisitos legales del título ejecutivo, por contener la sentencia una obligación clara, líquida y actualmente exigible al demandante, teniendo en cuenta que el auto de obediencia de fecha 27 de mayo de 2.019, se notificó por estado No. 85 del 7 de junio de 2019, habiéndose constatado que transcurrieron los 10 meses señalados en el artículo 307 del C.G.P., es del caso dictar orden de pago a favor de la demandante, CIELO AIDA TAMARA HOYOS por concepto de retroactivo pensional causado entre el 8 de agosto de 2012 y el 19 de marzo de 2013 en cuantía de \$64.102.100,00, más los intereses moratorios generados

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.
Telefax: 3798813. www.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico. Colombia
Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

por dicho retroactivo pensional a la tasa más alta que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia junto con las costas procesales de primera y segunda instancia por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$2.474.348,00), quedando la demandada autorizada para efectuar el respectivo descuento por salud al retroactivo liquidado” – Negrilla y subraya fuera de texto-

Lo anterior implica que en todo caso resulta inane dar trámite a la excepción propuesta por cuanto ello ya fue objeto de estudio por parte de este Juzgado al librar el citado mandamiento de pago, aunado a que, en escrito del 31 de enero de 2023, la parte activa de este proceso recorrió a motu proprio el escrito de contestación de la demanda ejecutiva, refiriéndose al escrito de contestación de la demanda que hiciera COLPENSIONES, en el que alega que el escrito de contestación tiene un fin dilatorio.

Dirimido lo concerniente a la excepción propuesta, se observa que la demandada también alegó el incidente de inembargabilidad de las cuentas del Régimen de Prima Media, con fundamento en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, que dispone:

“Inembargabilidad. Son inembargables:

1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas ...”

Las causales de levantamiento de las medidas de embargo y secuestro se encuentran enunciadas en el artículo 597 del CGP (Art.145 CPTSS), en especial el numeral 11 que se refiere a los recursos públicos de que trata el numeral 1º del artículo 594 ibidem catalogados como bienes inembargables, esto es, “Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social”.

Es de resaltar que la medida de embargo decretada por este Juzgado en el citado mandamiento de pago, fue del siguiente tenor: “*DECRETESE el embargo y retención preventiva de los dineros de propiedad de la demandada COLPENSIONES con NIT. 900-336004-7, que se encuentran depositados en las cuentas del Banco de Occidente y Bancolombia, previstos para la libre destinación o el pago y rubro de sentencias, transacciones y conciliaciones, o en caso de no existir ni ser suficientes serán las correspondientes a destinación específica tales como gastos de administración o en su defecto las de los fondos de reparto de régimen de prima media y su respectiva reserva que se traduce en la destinada para el pago de pensiones, en atención a la excepción del principio de inembargabilidad por tratarse de acreencias laborales en materia pensional y atendiendo las Sentencias C-192/95 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional. Limitando el embargo hasta la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00). Librese los oficios respectivos.*”

De la anterior decisión resulta evidente que este Juzgado previo al decreto de medidas cautelares se refirió a la excepción del principio de inembargabilidad frente a las acreencias laborales en materia pensional, para lo cual también es de recordar que este Juzgado cuando libró el mandamiento de pago en mención, esgrimió:

“(…) solicita la apoderada de la demandante en memorial de fecha 30 de septiembre de 2019, como medidas preventivas el embargo y secuestro de los dineros de la demandada



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

que se encuentran depositados en la cuenta de ahorros y corriente en los Bancos de Occidente y Bancolombia.

Frente a la anterior solicitud, debe tenerse en cuenta lo expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero del año 2003, expediente 19508. M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sobre la naturaleza jurídica de los dineros recaudados por el extinto I.S.S. hoy COLPENSIONES, donde sostuvo:

“Los recursos para el pago de las prestaciones que se originan en el Sistema General de Pensiones son de carácter parafiscal como lo ha enseñado la doctrina.

Uno de los elementos esenciales de la parafiscalidad es la de que esta clase de recursos constituyen un patrimonio de afectación, esto es, que los bienes que lo integran han de destinarse a la finalidad que la ley les señala en el momento de su creación; así, los fondos constituidos con las cotizaciones o los aportes que efectúan por mandato de la ley, el Estado o los particulares, a cualquiera de los regímenes de pensiones, han de consagrarse exclusivamente a pagar las prestaciones del servicio de la seguridad social en pensiones, como lo determina el artículo 283 de Ley 100 de 1993.

De los patrimonios de afectación no puede predicarse propiedad –solo anti técnicamente- por cuanto nadie puede ejercer el poder de libre disposición sobre ellos. Por esta razón es que las normas de la Ley 100 de 1993 que regulan el Fondo de Solidaridad Pensional (artículo 25) o el régimen de prima media con prestación definida, (artículo 52) o el de ahorro individual con solidaridad (artículo 90), sólo le otorgan el carácter de administradoras a las entidades a las que se le confía la gestión de los recursos.

Así entonces, el fondo económico del que proviene el pago de las pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes aunque esté radicado en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, no es propiedad suya, sino que éste es sólo administrador de aquellos.”

Ahora bien, pese a que del análisis de los artículos 17, 93 y 129 del Decreto 1650 de 1.977, artículos 2 y 26 de la Ley 38 de 1.989, artículo 41 de la Ley 179 de 1.994, los artículos 134 y 137 de la Ley 100 de 1.993, y el numeral 1° del artículo 594 del C.G.P. se llega a la inexorable conclusión de que en términos generales existen recursos del patrimonio de COLPENSIONES que son de carácter de inembargables sobre todo si se trata de aquellos que son girados directamente a través del Presupuesto General de la Nación y por ende sus bienes están involucrados en el mismo, no es menos cierto, que el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 además de indicar que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, señala que “los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetaran en su integridad los derechos reconocidos a terceros con estas sentencias”, y que en materia de procesos ejecutivos laborales, de manera excepcional tal como lo ha manifestado la Honorable Corte Constitucional¹, en casos como el sub-examine procede el embargo y la posterior entrega al demandante de aquellos dineros del COLPENSIONES que gozan del beneficio de inembargabilidad en el evento de que las cuentas bancarias de libre destinación o previstas para el pago de sentencias condenatorias, conciliaciones y transacciones del ente de seguridad social demandado no fueren suficientes para cubrir la obligación laboral que consta en un título claro, expreso y exigible, o que tal entidad carezca de dichas cuentas, toda vez que se trata de créditos del orden laboral y de la seguridad social, reconocidos y representados como títulos en sentencias judiciales, que precisamente tienen por objeto la satisfacción y pago de derechos pensionales, los cuales se acompañan con la destinación de los dineros que posee COLPENSIONES para el pago de las pensiones que reconoce, es decir opera la excepción constitucional a la inembargabilidad de los recursos del demandado en defensa de los derechos fundamentales del trabajador o pensionado que últimas constituye uno de los fines del Estado Social de Derecho Colombiano, esto es, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (Art. 2 C.P.), en razón a que las

¹ Ver entre otros fallos de la Corte Constitucional, las sentencias C-192 de 1.995 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

acreencias laborales no fueron canceladas por la entidad pública en el término de Ley con los recursos del presupuesto destinado para tal fin.

En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada, esgrimió:

“(…)

El principio de inembargabilidad presupuestal pretende hacer efectivo el postulado de la prevalencia del interés común sobre el particular.

No obstante lo anterior, el Estado no puede hacer caso omiso de las obligaciones de contenido laboral por él contraídas.

Por tanto, esta Corporación ha sostenido que en el evento de existir créditos laborales insolutos por parte de las entidades públicas, la inembargabilidad de los recursos públicos sufre una excepción de naturaleza constitucional.

(…)

En conclusión, esta Corporación reconoce que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos se cimienta en la protección de la prevalencia del interés colectivo general, que en últimas se dirige al cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho.

Con lo anterior, no se quiere decir que la multicitada inembargabilidad de los recursos públicos sea absoluta, por el contrario, tratándose de acreencias laborales tal principio se quiebra y la protección del interés general debe ceder frente a la protección de los derechos fundamentales de aquellos trabajadores que se han visto afectados por el no pago de sus salarios y prestaciones sociales”.

«Sentencia T-1195 de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería» (Subraya fuera de texto).

Conforme lo anterior se colige, que los recursos administrados por el Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES no son de propiedad de éste, pues los mismos provienen de los aportes de Seguridad Social, y rendimientos de las reservas en los casos de Pensiones. En consecuencia, los mismos se encuentran bajo su administración, con el fin de lograr el pago de las prestaciones de sus afiliados.

De igual manera resulta evidente que en este caso opera la excepción al principio de inembargabilidad por tratarse de acreencias laborales de índole pensional, lo que conlleva inexorablemente a decretar el embargo y retención preventiva de los dineros de propiedad de la demandada previstos para la libre destinación o el pago y rubro de sentencias, transacciones y conciliaciones, o en caso de no existir ni ser suficientes serán las correspondientes a destinación específica tales como gastos de administración o en su defecto las de los fondos de reparto de régimen de prima media y su respectiva reserva que se traduce en la destinada para el pago de pensiones, atendiendo las Sentencias C-192/95 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-566 de 2.003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1195 de 2.004 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras proferidas por la Corte Constitucional.”

Lo antes expuesto también implica que resulta inane dar trámite a la inembargabilidad aducida por cuanto ello ya fue objeto de estudio por parte de este Juzgado al librar el citado mandamiento de pago. En efecto, nótese que ya se estudió la calidad y destinación de los dineros sobre los que pesa la medida de embargo decretada y ningún argumento nuevo fue formulado por la pasiva sobre lo considerado por el Juzgado, razón por la cual no estaría llamado a prosperar tal incidente.

Con base en lo anterior, este Despacho tendrá por contestada la demanda ejecutiva por parte de la demandada, y se abstendrá de dar trámite a la excepción de falta de exigibilidad del título formulada por la pasiva, así como al incidente de desembargo que propuso, para estarse a lo resuelto en el mandamiento de fecha 9 de noviembre de 2.022, además de reconocer personería al apoderado judicial de la demandada, por los motivos antes expuestos.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En mérito a lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: TÉNGASE por contestada la demanda ejecutiva por parte de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

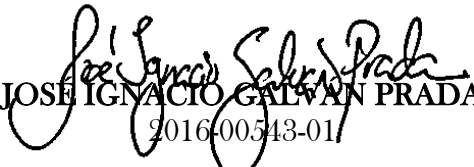
SEGUNDA: ABSTENERSE de dar trámite a la excepción de falta de exigibilidad del título formulada, así como al incidente de desembargo propuesto por la demandada, para estarse a lo resuelto en el mandamiento de fecha 9 de noviembre de 2.022, por los motivos antes expuestos.

TERCERO: TÉNGASE a la Dra. MARIE ROSALES CHIMA como apoderada principal y a la Dra. MILAGRO MORRON BOLAÑO, como apoderada sustituta de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, para los fines y términos de los poderes a ellos conferidos.

CUARTO: Una vez se encuentre ejecutoriado el presente proveído, pase al Despacho el presente proceso para continuar con el trámite a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVAN PRADA
2016-00543-01

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 10 Mes 07 Año 2023
Notificado por el Estado N° 097
La Providencia de fecha Día 06 Mes 07 Año 2023
La Secretaria María B Potes Santodomingo